



## LAS MEDIACIONES ESTADO-SOCIEDAD Y LOS INTERESES CORPORATIVOS<sup>1</sup>

Gustavo Larrea Cabrera\*

Para el futuro de América Latina es de vital importancia reflexionar sobre las relaciones entre sociedad civil y Estado, los métodos de mediación entre ambos polos y el peso de los intereses corporativos en el sistema político. Por ello es necesario enfatizar en la íntima relación existente entre formas productivas, demandas del entorno internacional globalizado, organización social, sistema político y régimen político. En América Latina, a mediados de los noventa, el ajuste estructural, la adaptación acrítica de los procesos productivos a la dinámica de la economía mundial y los subsecuentes impactos de estos procesos sobre los actores sociales y sistema político crean condiciones de regresión en la democracia, deslegitimación del Estado y las formas de representación política, así como de los sistemas de mediación entre Sociedad y Estado.

El resultado de los ajustes estructurales es la ruptura del tejido social y la decadencia de actores sociales históricos en todo el continente, tales como los movimientos de trabajadores, cuyo peso relativo y capacidad de respuesta defensiva se han reducido de manera impresionante, respecto a épocas anteriores.

Por otra parte, los intereses corporativos de los sectores de la élite han visto incrementado su poder, su capacidad de incidir cada vez de manera más directa sobre las decisiones del Estado, con lo que los sistemas políticos de los países se vuelven más autoritarios y excluyentes, aun en el contexto de la democracia electoral que existe en toda la región.

La desarticulación del tejido social, producto del ajuste estructural; la pauperización de grandes sectores poblacionales; la reducción de los sistemas de seguridad social; el cambio de las leyes laborales, e incluso, en un más alto nivel, las reformas a las Constituciones de los países para adaptar las instituciones políticas al cambio de la economía global, expresan una nueva

\*Ex-Diputado ecuatoriano y Ex-Viceministro del Interior. Segundo Presidente alterno del Parlamento Centroamericano.

<sup>1</sup> Extractos de la ponencia presentada por el autor en el Seminario Internacional "Estilos de hacer política, grupos de poder y gobernabilidad en América Latina".

situación histórica en la que los actores antes representados han dejado de existir, han cambiado su fisonomía o han reducido considerablemente su poder de representarse en la política.

Asimismo, la pauperización de la clase media, la impresionante reducción de la burocracia estatal y el decrecimiento visible del activismo radicalizado entre los estudiantes expresan la desorganización de los actores sociales populares, que fueron relevantes hasta mediados de los ochenta. Incluso el movimiento poblacional sufre una retracción en su capacidad de movilización y convocatoria hacia fines de la década.

Por otra parte, los nuevos movimientos sociales, en los que tanta esperanza se puso en circunstancias de crisis aparentemente terminal, como en Perú de fines de los ochenta, no dejaron de ser una esperanza que no cristalizó, sea porque las iniciativas auto-organizativas de la sociedad fueron brutalmente respondidas por los actores violentistas, o porque el Estado se comprometió en un proceso de concentración autoritaria que tampoco dejaba espacio a este tipo de organizaciones.

Otros nuevos movimientos sociales expresaron la inmensa fragilidad de este tipo de organizaciones en el largo plazo: los ecologismos escindidos entre conservacionistas y radicales, en los extremos, incapaces de articular un verdadero movimiento social de largo plazo que postule un modelo de desarrollo viable y capaz de generar consensos prospectivos. El feminismo, reducido a reflejar problemáticas exclusivamente de sectores de clase media y alta, incapaz de pronunciar un discurso con posibilidades de expandirse en la sociedad en general.

Tal vez los movimientos en pro de los derechos humanos y aquellos más recientes en contra de la corrupción sean los mecanismos expresivos más importantes de los movimientos sociales de mediados de los noventa. Sin embargo, las demandas que ambos tipos de movimientos tienen ante sí difícilmente podrán ser llevadas adelante de manera integral sin que antes se construyan las condiciones de una movilización social sostenida y a gran escala, que por las características actuales del proceso social y político latinoamericano es improbable.

Por otra parte, emergen nuevos actores sociales. El movimiento indígena expresa una nueva forma étnica de organización social, propia de la sociedad contemporánea. El resurgir de las identidades y conciencias étnicas, es un proceso que se da en todo el mundo. En América Latina es especialmente válido en países como Bolivia, Ecuador, Guatemala, Perú, pero también se muestra en México, al menos en aquellos estados con un fuerte componente poblacional indígena.

Lo anterior, apunta a un tema central en lo que respecta a las nuevas formas de participación política que se gestan en América Latina. Este tema se refiere a los fenómenos de globalización y articulación a la economía mundial que crean graves conflictos, y profundizan hasta la exasperación otros antiguos, tal como se expresa en el caso mexicano. La lógica del neoliberalismo suponía que amplios sectores poblacionales, geográfica y culturalmente situados en el sur del país, se verían no solo rebasados, sino también subsumidos dentro del proceso que abría -teóricamente- las puertas del paraíso neoliberal.

En ese sentido, el Tratado de Libre Comercio fue percibido como el proceso cúlmine de esta tendencia: las comunidades indígenas y campesinas que no se encontrasen prontamente vinculadas al mercado mundial, serían inviables, y su única opción estaría situada en la dicotomía “perecer o globalizarse”. Sin embargo, he ahí un proceso de cuestionamiento al sistema político que pone en duda las formas existentes de representación política, los contenidos mismos de las políticas económicas y sociales y las ilusiones de una élite que decidió mirar únicamente hacia el Norte, perdiendo de vista a su propio pueblo.

En verdad, la desestructuración del tejido social a raíz del ajuste estructural ha implicado a mediano plazo la generación de nuevas identidades, la presencia de nuevos actores en un escenario diferente al anterior, aunque con profundas continuidades con el mismo.

Por ello, los procesos de reconfiguración de la red de la sociedad civil tienen potencialidades positivas para impactar en la democracia, permitiendo la ampliación de la participación. En estos últimos quince años las democracias latinoamericanas apenas rebasaron el marco puramente electoral, provocando grandes niveles de anomia en la población, y deslegitimación de los partidos e instituciones políticas. Esta situación podría ser revertida si se generan mecanismos que permitan una participación ampliada de los nuevos actores subalternos, nuevos consensos sociales que se dirijan hacia la lucha contra la pobreza, la corrupción y en favor de un modelo de desarrollo viable y más equitativo.

La democracia electoral es una condición necesaria pero no suficiente, ni mucho menos, para definir un sistema político que pueda llamarse propiamente “democrático”. Más aún cuando las decisiones políticas que se toman en las cúpulas del Estado se encuentran disociadas de los intereses de los grupos subalternos organizados, y, por el contrario, responden crecientemente a la orientación de los grupos de élite organizados, los cuales tienen un alto grado de influencia bajo las nuevas circunstancias.

Una propuesta de cara al próximo milenio debe plantear la profundización de la democracia, su expansión de meros sistemas electorales mediante los cuales se escogen dirigentes, a una concepción integral de la misma, en la que se la recree en sus aspectos políticos, ya que la participación debe ser algo más que el depositar el voto. Debe incluir además aspectos económicos, sociales y culturales, y ello sólo puede conseguirse respetando los derechos e intereses de sociedades que lindan con la miseria, en las que existe una gran diversidad cultural y donde fenómenos de discriminación forman parte de las rutinas políticas reconocidas.

Una democracia electoral que abre el paso a la presencia exclusiva de los sectores y élites tradicionales de poder en la toma de decisiones y su ejecución es una democracia cuestionable que requiere transformaciones sustantivas. No es posible aceptar por más tiempo, sin contrapesarla, la presencia excluyente de los intereses corporativos de las élites en la decisión política.

Esta influencia de los sectores corporativos financieros y exportadores, fundamentalmente, se expresa en la composición de los equipos técnicos que dirigen las orientaciones de las econo-

mías en los países latinoamericanos. Los mismos se encuentran compuestos por cuadros tecnocráticos graduados en las universidades norteamericanas, con una alta coherencia interna por sus raíces y vínculos sociales con las élites y las asociaciones empresariales, así como por una orientación ideológica neoliberal ortodoxa. Estos cuadros técnicos también tienen contradicciones con ciertos sectores de las élites tradicionales cuando intentan generar políticas que se contraponen con intereses sectoriales de las mismas. Un ejemplo de ello es la política económica en Perú y Ecuador hacia mediados de los ochenta, contradictoria con ciertos sectores industriales que se vieron amenazados por la orientación radicalmente aperturista de los cuadros técnicos.

Ello comprueba que las élites también tienen grados de diferenciación en su capacidad de influir sobre las políticas y la toma de decisión en el Estado. Son los sectores más internacionalizados de las élites y los empresarios los que mayor peso tienen al momento de definirse las orientaciones de la política en los países latinoamericanos.

Esta situación, a su vez, crea el espacio para que, en el nuevo escenario de libre circulación de capital, también actores extranacionales tengan un peso creciente en la toma de decisiones. Más aún cuando las agresivas políticas de privatización tienden a permitir su ingreso incluso en áreas vitales, en términos estratégicos, para los países de la región, como el área energética. Con ello se estarían creando las condiciones para una creciente concentración del poder en manos de los sectores de las élites internacionalizadas y las corporaciones extranjeras.

Todo esto va en detrimento de los intereses nacionales de desarrollo armónico y mínimamente equitativo, y en contra de los intereses de amplios sectores de la población que se ven excluidos del modelo de desarrollo en curso, creando las condiciones para un potencial estallido social. Esta situación es reconocida por recientes documentos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde se evidencia preocupación por los efectos disruptores en el mediano y largo plazo de las políticas neoliberales aplicadas durante los últimos años en los países latinoamericanos.

## **SISTEMA POLÍTICO E INSTITUCIONALIDAD**

Los sistemas políticos de América Latina se encuentran en pleno proceso de reestructuración, como sucede en el caso de Ecuador, en que las reformas constitucionales se encuentran siendo tratadas en el Congreso y donde hubo un referéndum para ciertos cambios; o como el caso de Colombia, donde se requirió la convocatoria a una Asamblea Constituyente que reconoció la representación a nuevos actores políticos no partidarios, con miras a posibilitar un acuerdo nacional que permitiese superar, aunque sea parcialmente, la profunda crisis institucional del país.

En Perú, la opción autoritaria para reformular al sistema político y concentrar aún más poderes en el Ejecutivo fue el mecanismo escogido para realizar estas transformaciones; en el caso mexicano, asistimos a la caída vertiginosa de la credibilidad y poder incuestionado del Partido

Revolucionario Institucional (PRI), y el sistema político instaurado desde 1936, el cual se encuentra agotado en medio del fracaso económico, la corrupción generalizada, la violencia política y la contestación armada.

El problema, actualmente, parece ser el de cómo procesar eficientemente las nuevas demandas de los grupos sociales y de la sociedad que resultan del ajuste estructural. Una vez, prácticamente, agotado este período histórico, nuevas opciones y necesidades se abren ante los sistemas políticos latinoamericanos.

De ahí que, las formas tradicionales de mediación entre Estado y Sociedad presentan severas limitaciones a futuro.

Se está asistiendo a profundas transformaciones en la estructura del Estado, en las formas organizativas de la sociedad, que exigen el repensar los mecanismos de mediación entre sociedad y Estado, lo que implica recomponer a los mismos, redefinirlos en unos casos, crear otros nuevos en otros, en miras a resolver las demandas de los sectores poblacionales actualmente excluidos.

La representación directa de los sectores de interés -o corporaciones- existe ya en el actual esquema, pero limitado a aquellos grupos de las élites económicas, sociales y políticas. Se requieren instituciones que reconozcan el nuevo tejido social que se está recomponiendo en la base de la sociedad, esto es, que logren conseguir la interlocución directa entre Estado y Sociedad. Y se requiere democratizar a los partidos políticos frente a la fragmentación y diversidad de intereses que coexisten en la sociedad, los cuales, a su vez, deben reconocerse mutuamente, para permitir la consecución de una real democracia política, económica, social y cultural de cara al siglo XXI.

## REPRESENTACIÓN Y CULTURA POLÍTICA

Lo anterior lleva a enfatizar que no bastan transformaciones reales en la sociedad, ni alteraciones controladas de las instituciones. No es suficiente la "ingeniería política" para dar cuenta de estos grandes desafíos que tienen las sociedades latinoamericanas si se quieren democracias viables, incluyentes, polifacéticas y que respondan a los intereses del desarrollo equitativo.

No se puede negar que en América Latina ha prevalecido una cultura política sustentada en el autoritarismo, la imposición y una suerte de inmoralidad que fomenta procesos de corrupción en todos los niveles de la sociedad, que provocan relaciones clientelares y compra de conciencias, y que han convertido el quehacer político en un espectáculo alimentado del escándalo.

Asimismo, se denota en la mayoría de los dirigentes políticos una escasa formación ideológico-política, pobreza cultural y desconocimiento de la realidad y la vida de sus naciones. Así lo revelan algunos estudios, lo cual los convierte en protagonistas frágiles, inconsistentes y sin capacidad para promover una gestión político-administrativa del Estado con perspectiva de futuro.

Todos estos factores conspiran contra la embrionaria democracia latinoamericana y si bien el Estado debe fomentar una cualificación de sus dirigentes inmediatos y futuros, no es menos cierto que los partidos políticos tienen también una responsabilidad directa sobre la promoción de su dirigencia.

Frente a esta problemática, se requiere un cambio radical en los sistemas de valores que informan de la percepción que tienen los diversos actores sobre qué es la política y cuáles son sus objetivos. Esto es, se necesita urgentemente una redefinición de las culturas políticas de raíces autoritarias, excluyentes, elitarias que existen en todos los países de la región. Es ahí donde probablemente los cambios sean menos perceptibles y más moleculares, donde no se pueden aún postular grandes tendencias, sino apenas impulsar prácticas cuyo sentido aún no es aprehensible a largo plazo.

Es imperativo en la hora actual contraponer a aquella cultura autoritaria e impositiva, una cultura política distinta, que privilegie el diálogo y el consenso, que promueva el respeto a la diversidad constituida de las naciones en los órdenes ideológico, político, étnico, cultural, regional, de género y generacional.

Los protagonistas de la nueva generación de dirigentes políticos tienen la obligación histórica de revalorizar los códigos de procedimiento democráticos, dotar de nuevos contenidos a la gestión política y promover la participación de la sociedad en la toma de decisiones, para que no se sacrifiquen los intereses de las mayorías ni de las minorías en nombre de intereses particulares.

Este objetivo ético únicamente se puede sustentar en transformaciones secuenciales y profundas que amplíen esta nueva cultura política del diálogo, que desestimen los mecanismos clientelares, cacicales y patrimoniales de la política y fundamentalmente que promuevan canales democráticos y participativos de todos los actores de la sociedad, para que sean corresponsables del futuro de las naciones de la región.

Ello significa la necesidad de impulsar una nueva cultura política que acepte el derecho conjunto de la sociedad a la interlocución directa con el Estado, que potencie el rol de los partidos políticos como mediaciones que agregan intereses particulares y los expresan en relación al interés global de la sociedad.

Una nueva cultura política que se oriente a establecer grandes acuerdos nacionales, cuyo contenido político de fondo sea la democratización económica, social y cultural. Los empresarios necesitan estabilidad, continuidad en las políticas emprendidas y crecimiento sostenido; la población demanda empleo y vida digna; y los actores políticos podrán relegitimar su papel en un escenario viable.

La cristalización de estos objetivos, en los cuales reside el futuro democrático de América Latina, depende del proceso político concreto; de la altura y preparación en las discusiones político-ideológicas; de la capacidad de los grupos y sectores sociales de movilizar a la sociedad

tras sus planteamientos; del complejo campo discursivo donde los diversos discursos particulares confluyen y se sintetizan en prácticas políticas de nuevo signo.

Por ello, la acción molecular en los más diversos espacios crea la posibilidad de la transformación cierta de la política. Ciertas rutinas y comportamientos sociales cotidianos pueden ser contestados y transformados en la misma cotidianidad. Por aumento y multiplicación de focos de nuevos sentidos en la sociedad, las instituciones y las prácticas políticas, es posible entrever un futuro capaz de resolver los graves problemas de las naciones latinoamericanas.

Otro aspecto fundamental que debe ser considerado en esta problemática tratada, es la transformación que han sufrido las sociedades latinoamericanas con la revolución científico-tecnológica, donde la información ha llegado a ocupar un lugar privilegiado para el ejercicio del poder.

En la actualidad el escenario que ocupa la "opinión pública" ya no es aquel relativo a las propuestas y demandas de las organizaciones sociales, cuyo peso específico en los países de la región obligaba a una interlocución con estos actores. Ahora el marketing político, la televisión y la opinión de los medios han desplazado a aquellos actores, transformando la actividad política en un espectáculo.

Considerando que uno de los principales niveles de la formación de la conciencia ciudadana es la "opinión pública", es fundamental la democratización de las sociedades también en este aspecto, ya que ello facilitará una deliberación y participación activa de la población en la toma de decisiones.

## **LAS DEMANDAS DESDE LA SOCIEDAD CIVIL**

Cada vez con más fuerza se anida en el seno de las organizaciones de la sociedad civil el descrédito, la desconfianza y la decepción de la política, lo cual ha llevado a una suerte de "corporativización" de las agrupaciones en defensa de intereses particulares y a una pérdida de aquella visión de transformación social que se mantenía hasta la década pasada.

Las transformaciones ocurridas en el Estado han abonado en esta dirección. Sin embargo, desde la propia sociedad se ha ido articulando una serie de alternativas que alimentan un sentido de ciudadanía y de participación democrática que es necesario estimular, porque en gran parte ahí están algunas de las respuestas. No sólo para darle nuevos sentidos a la relación Estado -Sociedad, sino porque aportan sustancialmente a la generación de alternativas económicas viables.

En primer lugar, una demanda de las organizaciones sociales es la participación en las políticas de desarrollo local, que superen las estrategias de supervivencia y se orienten hacia alternativas reales de desarrollo, que se articulen a la educación, salud, vivienda y servicios. En Ecuador la participación del sector no-gubernamental y las organizaciones comunitarias ha sido de enorme importancia para imaginar nuevas opciones de desarrollo.

Esta noción es esencial, porque mientras más pauperizada esté la población, cualquier esfuerzo por recuperar su condición de ciudadanía será una abstracción. En otras palabras: con miles de mendigos en la calle no se puede construir una nación.

Otra de las demandas fundamentales de la sociedad civil, que tiene íntima relación con el punto anterior, es el acceso a la información, concebida hoy como poder. Pero es la propia organización social la que debe generar nuevas redes de información, articuladas no sólo a sus demandas, sino al intercambio de experiencias organizativas, productivas, políticas y culturales. La tecnología abre opciones en este sentido y le corresponde a la sociedad civil apropiarse de sus ventajas y generar valor agregado a su condición social.

Es fundamental también la participación ciudadana en el control y fiscalización de las políticas públicas. En algunos países han surgido experiencias interesantes que deben ser estimuladas. En Ecuador, el Movimiento "Manos Limpias" provocó una gran expectativa ciudadana, pero es necesario que se ubiquen vocaciones más permanentes que adquieran peso social, pero también peso político.

También es una demanda social la necesidad de gravitar en las decisiones públicas, superando la demanda local. Las organizaciones indígenas en Ecuador han avanzado en este sentido, influenciando positivamente sobre los distintos poderes del Estado, pero además es importante la participación de estos actores sociales en torno a otros aspectos, como seguridad social, privatizaciones, grandes obras, y otros.

Por último, una demanda clave para el éxito de todas estas propuestas, es la democratización y ampliación de las mismas organizaciones sociales, la relegitimación de su estatuto institucional en el escenario propio y en el plano nacional, la capacidad de representar a la base, así como la continuidad de sus iniciativas organizativas.

## CONCLUSIONES

Los ajustes estructurales han provocado la ruptura del tejido social, la decadencia de actores sociales históricos en todo el continente, la violencia y crecimiento de la criminalidad como producto de la extrema pobreza, la inseguridad ciudadana, la anomia y el desinterés de la población en el porvenir.

La desestructuración de las sociedades latinoamericanas es alarmante y podría degenerar en una ausencia total de horizontes de cambio y transformación. En la actualidad gran parte de la población está entregada por entero a la ya heroica tarea de sobrevivir.

Es deber del Estado propiciar un escenario social participativo, democrático en lo económico, social y cultural, para que se pueda construir un sistema político estable, viable y con hondo sentido de justicia social.

Es deber de la sociedad civil construir espacios organizativos propios que se vinculen a lo productivo, para que no sólo generen demandas, sino alternativas de solución a los enormes problemas que afectan a la población.

Las organizaciones sociales demandan una nueva forma de articulación con la vida política y con los partidos políticos, que les posibilite generar derechos para sí mismos y actuar con voz propia. Las experiencias anteriores han sido de subordinación y manipulación.

Uno de los aspectos que define a los movimientos sociales es su apareamiento en ciertas coyunturas y su eventual desaparición cuando el acontecimiento que los motivó ha pasado a segundo o tercer plano. Podría ser una virtud ésta de ser oportunos con las coyunturas, pero si no se cuenta con políticas organizativas con horizontes más amplios, se corre el riesgo de caer en el síndrome de la fugacidad.

Es imprescindible crear una nueva cultura política, basada en el diálogo y el consenso, que deseche las prácticas autoritarias e impositivas, que respete la diversidad de nuestras sociedades en todos los órdenes: político, ideológico, étnico, regional y cultural.

Los partidos políticos necesitan modernizarse, formar a sus cuadros y redefinir sus prioridades en una perspectiva de largo plazo, donde la democracia interna y una nueva ética sean fundamentos que aseguren una legitimidad en el seno de las naciones latinoamericanas.

América Latina no podrá superar la pobreza si no se establecen en cada país grandes acuerdos nacionales, que independientemente de las alternativas de gobierno, se mantengan en el tiempo, para salir de la crisis y el subdesarrollo.